

Capítulo 7



La transformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) en el partido Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (FARC): propuesta reflexiva desde la teoría de las élites

Mario Esteban Salamanca¹⁸

Este capítulo propone un análisis de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) desde los postulados establecidos por la teoría de las élites, planteando que las farc-ep fueron una élite armada en los territorios bajo su influencia. Como élite lograron incidir en el ordenamiento de los territorios por medio del uso de las armas, el control de la economía y el dominio sobre las decisiones comunitarias, a través de variadas estrategias que inicialmente contaron con la legitimación de la base social, y con el tiempo privilegiaron como eje las dinámicas violentas.

La exposición se encuentra estructurada en tres apartados. En el primero, se aborda la teoría de las élites a partir de los aportes de Michels (1991), Mosca (1984, 2009), Pareto (1980, 1981) y Wright (1987). Basado en estos autores, se hace una aproximación al concepto de *élite*, sus características, el ciclo de circulación de las élites y la ley de hierro de la oligarquía, con el fin de proponer a las FARC-EP como élite armada. En el segundo, se analiza el trasegar de las FARC-EP, teniendo en cuenta sus orígenes y cuatro periodos propuestos por Aguilera (2014), con los cuales se observan algunas transformaciones de la guerrilla y su cambio final en el partido político Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (FARC). En esta sección, se establece una discusión sobre las fuentes de poder de la organización armada desde el uso de la violencia y los productos culturales y cómo la dejación de las armas es un punto clave de análisis a la hora de abordar su consolidación como fuerza política en el interior del escenario de participación representativa tradicional. Esta transformación plantea para el partido FARC retos relacionados con la reconciliación, la reparación, la construcción de paz y la consolidación de una base social mayoritaria entre la población colombiana que le permita acceder al sistema representativo de poder político.

18. Estudiante de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y licenciado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Correo electrónico: msalamanca@udistrital.edu.co

Finalmente, se propone un apartado con algunas consideraciones finales que contrastan la teoría de las élites con el escenario del conflicto armado colombiano, algunos apuntes sobre la ley de hierro de la oligarquía y una propuesta de definición sobre la denominación de élite armada.

Teoría de las élites

Los postulados desarrollados por Michels (1991), Mosca (1984, 2009) y Pareto (1980, 1981) establecen que, en toda sociedad, existen grupos minoritarios que tienen las herramientas, habilidades, fuerza y recursos para establecer un control de las dinámicas sociales, así como de las relaciones entre actores en el interior de un territorio determinado. Este control se funda en la posibilidad que tiene una minoría para organizarse a sí misma, estando en contraposición con la mayoría, que es desorganizada.

La desorganización de la población deja en un estado de impotencia a sus miembros, dificultándoles la participación, la acción y la influencia para ordenar un territorio; por otro lado, el poderío de la minoría se ha conseguido desde la unificación, la articulación, la coordinación, el establecimiento de metas conjuntas, la comprensión mutua en cada parte y la acción concertada que lleva al grupo a desarrollar capacidad de control político, administrativo, militar, económico y religioso.

Esta perspectiva se autodenomina *realista* y expone que los sistemas democráticos no son posibles dentro de la sociedad capitalista: aunque insistan en llamarse así, solamente los son en apariencia y se orientan por una minoría organizada que, en las repúblicas representativas, se configura de forma cíclica entre recambios de diferentes élites o la renovación de una misma. Ha criticado las perspectivas colectivistas y marxistas por considerarlas utópicas, pero reconoce que el marxismo es el primero en percatarse de que las revoluciones durante la historia son el cambio de una clase de dominación por otra.

Según Pareto (1980), las élites pueden ser de carácter gubernamental o no gubernamental. Estas logran sus objetivos de forma eficaz apoyándose en las mayorías mientras las alejan de las herramientas conceptuales y de acción que les permitirían tener el poder para ordenar un territorio. Por otro lado, las masas ejercen presión constante sobre las élites para llegar a influir sobre las decisiones que toman las élites y su descontento puede llegar a movilizar el derrocamiento de una élite; sin embargo, esto pone en marcha un ciclo de recambios entre grupos minoritarios organizados que encuentran una estructura de oportunidad política para acceder al poder, con lo cual el reemplazo de la dominación previa llega a ser otra élite.

Para Michels (1991), este recambio con tendencia a producir minorías organizadas es el sustrato para formular la ley de hierro de la oligarquía, a partir de la cual propone que, independientemente del tipo de ordenamiento social vigente, sea democrático o totalitario,

existe un patrón desde el cual el poder es ejecutado por una minoría organizada. En consecuencia, Michels muestra el funcionamiento de esta ley explicando que una organización, cuanto más grande, necesitará tomar decisiones rápidas sobre temas complejos de acción, por lo que especializa el trabajo y delega las funciones principales en quienes tienen más experiencia y conocimiento, burocratizando los procesos. Esta dinámica, a su vez, lleva a que las organizaciones hagan balances entre efectividad y democratización de las decisiones, y, cuando este proceso está delegado en funciones especializadas, se forman liderazgos y sistemas de representatividad que con el tiempo llegan a consolidar élites.

En este sentido, Michels (1991) reivindica la metodología marxista en su análisis haciendo énfasis en que:

...no hay contradicción esencial entre la doctrina de que la historia es el registro de una serie continua de luchas de clases, y la doctrina de que *las* luchas de clases invariablemente culminan en la creación de nuevas oligarquías que llegan a fundirse con las anteriores (p.178).

Pero, por otro lado, Michels (1991) propone que lo que Marx no había tenido en cuenta es que la revolución y la democracia llegan a conducir, desde la experiencia histórica, a nuevas formas de élites y oligarquías que con el tiempo se separan de las mayorías, se renuevan para reafirmar su poder o entran en decadencia para ser reemplazadas por otras.

En el principio de los procesos transformativos, los liderazgos tienden a proyectarse como representantes de los intereses de las masas, pero, con el crecimiento de la organización y la consolidación de la especialización, se separan de los canales de comunicación de las masas, de su relación directa e, incluso, de los intereses que representaban. De forma paralela, los líderes llegan a desear mantenerse en el poder adquiriendo herramientas que se lo permitan y validando estrategias para permanecer en el poder, que van desde la especialización hasta la violencia, pasando por el convencimiento a la organización y a las mayorías y la negociación.

Wright (1987) es uno de los analistas recientes de las élites, quien afirma que la función especializada es la forma en la cual se establece un comportamiento ejercido regularmente, y, a partir de este, el actor se orienta en relación con otros actores en la organización, el campo y la sociedad. El actor es un grupo de funciones y la estructura social, un grupo de instituciones.

Ahora, para establecer un ordenamiento, las élites deben tener la capacidad de dirigir lo que, según Wright (1987), son los órdenes 1) político, 2) económico, 3) militar, 4) parental y 5) religioso y las esferas 1) tecnológica, 2) simbólica, 3) de estatus y 4) educativa. Hay que tener en cuenta que las esferas son transversales a los órdenes y, a través de estas, las sociedades organizan las formas de distribución de poder, de producción, de creación

simbólica y de uso de la fuerza, encontrándose principalmente dinamizadas y reguladas en las instituciones sociales.

Wright (1987) propone que la comprensión de las estructuras sociales contemporáneas debe reconocer la importancia de las élites como generadores de dinámicas sociales que son capaces de imponer proyectos de una minoría organizada sobre una mayoría desorganizada. Con la capacidad de coordinar el orden político con el económico y el militar, una minoría ejecuta el poder, y esto puede servir como advertencia a las repúblicas representativas del sistema capitalista para entender cómo se establecen sistemas totalitarios explícitos.

Con base en los elementos conceptuales expuestos, es posible afirmar que una élite es un grupo minoritario con respecto al total de la población del territorio en el que influye, que tiene la capacidad de incidir o dominar de forma directa el ordenamiento de un territorio y sus dinámicas al tener las capacidades más desarrolladas del campo en el que ejecuta su actividad; además, en el interior de uno de los órdenes (político, económico, militar, parental y religioso) crea conexiones con el resto de ellos y estrategias para articularlos con las diferentes esferas transversales (tecnológica, simbólica, de estatus y educativa). Este grupo minoritario se encuentra organizado y burocratizado desde su origen y posición en la estructura social, consolidada con sus capacidades de coordinación, articulación, unificación y selección de objetivos conjuntos, hacia los cuales se dirige a través de estrategias racionales concretas que van desde la especialización de funciones hasta la violencia, pasando por la representatividad, la negociación, el convencimiento, la manipulación de la sensibilidad, el engaño. Con estas estrategias, accede al soporte de las mayorías que están desorganizadas, y se guían principalmente por los sentimientos.

Las élites pueden ser gubernamentales o no gubernamentales y tienen la posibilidad de renovarse con el tiempo al integrar elementos que les permitan ajustarse a diversos escenarios, o, por el contrario, tienden a corromperse, a entrar en decadencia y descomposición, lo que activa ciclos de circulación y recambio que implican que las reemplacen un nuevo grupo organizado de capacidad más desarrollada y apoyado por las mayorías, el cual también tenderá a especializarse, burocratizarse y hacerse más efectivo.

FARC-EP y teoría de las élites

De acuerdo con Wright (1987), los grupos minoritarios organizados como élites no pueden ser totalmente poderosos si no tienen el control de las grandes instituciones. No obstante, el escenario de la violencia en Colombia permite observar que los territorios en los que la guerra se vive de forma directa, mayoritariamente rurales, no existe institucionalidad como tradicionalmente se la comprende, es decir, estructurada por el Estado. En ese sen-

tido, según Sandoval (2014), los conceptos sociológicos usados para el análisis en el conflicto armado colombiano y el fenómeno de la violencia son superados por las realidades relacionadas con el narcotráfico, las mafias de cuello blanco, los problemas estructurales del Estado, la corrupción, las masacres, el uso del terror para organizar la sociedad o la supervivencia de grupos armados al margen de la ley. Históricamente, en Colombia se ha visto que el Estado no logra administrar todos los territorios que están dentro de su frontera nacional y, por ello, la institucionalidad representativa del sistema de gobierno de la república representativa no se ha consolidado.

De acuerdo con Marín y Espinosa (2017), varios de los problemas en los territorios tienen que ver con la falta de institucionalidad anexa que permita establecer capacidades logísticas y financieras locales. Estos desafíos se han manifestado de manera más radical en el escenario del posacuerdo: en la implementación del acuerdo de paz, el Estado, que ha llegado por primera vez a varias partes del territorio colombiano, se ha percatado que no establece el orden y la institucionalidad, sino que llega como el actor nuevo en la vida cotidiana local.

En el caso de la Macarena, investigado por Marín y Espinosa (2017), se expone que, cuando se les pregunta a las personas por qué no acuden a las instancias legales para la solución de problemas en los territorios, son comunes los casos como el de “Don Josefo, presidente de la vereda el Yamú, [quien] preguntó en tono burlón a qué institución acudir si no había ninguna” (p. 443). La inexistencia institucional estatal en los territorios rurales de Colombia es un reto que debe afrontar el sistema de gobierno nacional si quiere evitar que el ordenamiento, la administración, el acceso cultural, la solución de problemas y necesidades en el país sea de nuevo determinada por actores diferentes a los de la participación política tradicional.

En Colombia, siguiendo a García y Revelo (2018),

Hoy, en la mitad del territorio nacional hay un Estado que solo existe en la letra de la ley, en el discurso político o en la nómina oficial [...]. Un Estado al que nadie le cree, ni siquiera los funcionarios públicos o los políticos que viven de él (p. 70).

Es un sistema de gobierno que, según la ley de hierro de la oligarquía, es mantenido por una élite gubernamental que no se ha renovado, que integra características de corrupción y decadencia, que no es eficaz en el territorio nacional, a causa de lo cual, de continuar con estrategias de gobierno sin ajustes, las diferentes formas de la violencia, incluyendo la política, van a continuar.

Para que el Estado colombiano supere los retos que afronta en el escenario del posacuerdo, debe vencer lo que, según Tuirán y Trejos (2017), es un sistema de corrupción cuasi natural, en el que los actores vinculados a las élites gubernamentales usan el aparato

institucional para fines propios. Las élites gubernamentales contemporáneas en Colombia, desde la perspectiva de la ley de hierro de la oligarquía, tienen tiempo de haberse especializado, burocratizado y separado de la relación directa con las masas y, además, han integrado características de decadencia como la corrupción, la incapacidad de renovación y el enfrentamiento constante a otros grupos minoritarios organizados no gubernamentales e ilegales.

Como consecuencia de este enfrentamiento y de la inexistencia estatal en los territorios rurales, las “guerrillas, los grupos paramilitares y estructuras armadas de los grupos narcotraficantes han asumido el control de la gestión administrativa local, la administración de la justicia y la dosificación de la violencia” (Tuirán & Trejos, 2017, p. 79). La diversidad de actores relacionados con los ordenamientos territoriales presentes en los contextos locales entra en pugna por establecer su propia forma de configurar el territorio, desterritorializando las dinámicas nativas campesinas, indígenas, negras y de los demás habitantes de estas zonas, reemplazándolas por sistemas de relacionamiento que tienen como eje la violencia.

De esto, es posible plantear que las FARC-EP no reemplazaron la institucionalidad de los territorios donde tuvieron influencia básicamente porque no existía institucionalidad que reemplazar. En su trasegar armado, lo que hicieron fue establecer sistemas paralelos para emular los ordenamientos tradicionales, controlando la política de sus territorios de influencia, las dinámicas económicas, las estrategias de aplicación de justicia, los accesos culturales e, incluso, las necesidades escolares. Se propone, entonces, que las FARC-EP fueron una minoría organizada con base social que apoyó la creación de una organización armada que con el tiempo y su crecimiento se burocratizó y especializó, pasando de ser una estructura embrionaria a lo que, de acuerdo con Cubides (2005), es una burocracia armada que alcanza su forma final como una élite armada, siendo el grupo que tiene la capacidad más desarrollada para concretar actividades en el orden militar dentro de los territorios bajo su influencia. Al inicio de la organización armada, poseían una base social adherida al discurso y objetivos de las FARC-EP, la cual declina con el tiempo y se establece que las armas son la principal fuente de ordenamiento con las que se conectan los órdenes político y económico.

Si incluso desde los centros urbanos se las expuso como secundarias en su papel de ordenamiento, o como enemigas irreconciliables del ordenamiento tradicional, lo cierto es que el proceso de paz 2012-2016 fue posible solamente bajo el reconocimiento de su beligerancia e influencia como ordenador paralelo de los territorios a los que el Estado deseaba llegar y establecer la institucionalidad democrática. Este reconocimiento permite observar que la pugna entre ambos grupos, Gobierno y guerrilla, es la pugna por ordenamientos diferentes de élites en proceso de renovación y con características de corrupción y decadencia.

La pugna armada llega a su término con los diálogos de La Habana, que culminan con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz

Estable y Duradera el 24 de noviembre 2016. Entre las estrategias programadas para la implementación del proceso de paz, se tiene en cuenta la transformación de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército el Pueblo (FARC-EP) en partido político.

Esta transformación es un punto clave en las dinámicas territoriales de FARC-EP. A la luz de la teoría de las élites, Pareto (1980) propone que las élites gubernamentales vigentes pueden usar distintas tácticas para defenderse de las élites en consolidación, entre las cuales se cuenta 1) el asesinato o muerte del otro; 2) las persecuciones que llevan a penas capitales, a la ruina económica o la exclusión pública; 3) el exilio o el ostracismo, y 4) la invitación a formar parte de la clase gobernante, creando una amalgama de élites e integrando a los grupos minoritarios organizados no gubernamentales al sistema de poder tradicional.

La eliminación del otro fue la táctica constante en la historia del país por parte de todos los grupos armados, tanto legales como ilegales, acompañada de persecuciones no solo para los miembros de FARC-EP, sino para cualquiera que solo por sospecha pareciera estar cercano al pensamiento de izquierda; incluso con la excusa de haber sido relacionados con FARC-EP, se persiguieron y asesinaron líderes sociales, estudiantiles, ambientales o habitantes civiles que el Ejército Nacional de Colombia hizo pasar, una vez asesinados, por integrantes de la organización guerrillera (Rojas, 2013).

Después, con el proceso de paz, la invitación dirigida a las FARC-EP a participar dentro de los mecanismos tradicionales legales de representación y ejercicio del gobierno dirigida supone una estructura de oportunidad política en la que, si bien explícitamente no se invita a dirigir en conjunto, ni a formar parte de la élite política tradicional, ni a servirla, pueden constituirse en las próximas décadas como una élite cohesionada que recupere y aumente su base social de apoyo entre las mayorías y ser una opción de recambio político, pero para ello deben ajustar sus estrategias de conexión con las masas.

Aunque es común encontrar en la literatura académica el uso indeterminado de las siglas FARC-EP y FARC, se usa aquí para distinguir el momento en que la organización estaba en armas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) del paso a ser el partido político Fuerza Alternativa Revolucionarias del Común (FARC), resultado del plan marco de implementación de los acuerdos de paz.

El caso de las FARC-EP es el de una élite armada con capacidad para influir directamente en los órdenes político, económico y militar de los territorios locales y la agenda nacional, mientras que FARC es una minoría en proceso de organización, con la oportunidad de consolidarse como clase política si logra recuperar una mayoría que se adhiera a su discurso como partido, si ajusta sus estrategias para relacionarse con las personas, si encuentra objetivos en común, así como elementos desde los cuales pueda ser representante de los habitantes colombianos.

De acuerdo con Garzón y Agudelo (2019), “la creación y legitimación del proceso de paz requirió un cambio en la representación de la estrategia de la guerra” (p. 260) y este

viraje de una percepción de la salida militar a la salida negociada se dio en la medida en que se reforzó el discurso según el cual la paz es presentada como una victoria de todos. Este cambio es posible fortalecerlo en la perspectiva de los habitantes de los sectores urbanos, donde FARC debe crear estrategias de conexión como actor recién llegado, de la misma forma en la que el Estado lo hace en los territorios rurales de previa influencia FARC-EP.

FARC-EP, una élite armada

De manera formal, las FARC-EP aparecen en Colombia en 1964. Su antecedente principal, que para Olave (2013) será el mito fundacional de las FARC-EP, y la base de su narrativa es el ataque estatal a Marquetalia y la defensa campesina del territorio como república. Siguiendo a Campbell (1991), el mito permite validar órdenes sociales en el interior de las comunidades y organizaciones en las que los sujetos se articulan frente a objetivos comunes y legitiman los órdenes que desean establecer.

El mito fundacional, según Olave (2013), “define a unos actores como protagonistas y a otros como antagonistas; los primeros, por supuesto, son quienes escriben la historia, fundan, forjan, luchan, se sacrifican y obtienen lo deseado, siempre relacionado con *lo justo*” (p. 151). En el caso de las FARC-EP, el antagonista de la narrativa es el Estado colombiano violento, incapaz de promover el desarrollo en las regiones, de negociar con el movimiento agrario o de garantizar los derechos fundamentales. Por otro lado, se legitima a las FARC-EP generando cohesión, identidad, principios de acción y coordinación en el interior del grupo, sentando las bases para impulsar su funcionamiento organizado y posterior transformación en élite.

El ataque a Marquetalia impulsa la creación de una nueva guerrilla que establece su acción desde un carácter racional defensivo sustentado por una base social campesina y en proceso de consolidación de una identidad férrea, pero consciente (Acosta, 2020), que contiene características tanto políticas como militares en un primer momento, y proponen la “idealización de Marquetalia como un mundo rural posible, perdido y arrebatado por la violencia estatal indiscriminada” (Olave, 2013, p. 154).

Para Olave (2013), es clave entender que inmortalizar los fundadores de la organización armada logra materializar la figura de los marquetalianos como el modelo del guerrillero: “una moral de conducta, caracterizada por la tenacidad, la rebeldía, la persistencia y el origen campesino; se trata aquí de figuras ejemplarizantes en la memoria discursiva del grupo insurgente” (Olave, 2013, p. 155). El origen de las FARC-EP muestra los elementos básicos para la consolidación de una élite: un primer momento con liderazgos claros y relacionados directamente con el movimiento agrario, el partido comunista colombiano

y los pobladores campesinos. Los líderes de la organización reivindican la revolución y articulan los postulados comunistas con la “figura del campesino pacífico que es obligado a tomar las armas para ser escuchado” (Olave, 2013, p. 155). En este origen hay una conexión entre organización armada y mayorías campesinas, donde las FARC-EP se estructuran como representantes de los sentires generales en un contexto de luchas por el acceso a la tierra y defensa del territorio campesino que apoya la reforma agraria como posible solución, pero que se defiende del Estado al no ver estrategias por parte de este para atender la violencia, la pobreza y la permanencia de una forma de propiedad donde prevalecen los terratenientes.

En este origen, el “campesino revolucionario es presentado como el homólogo del proletario de las urbes, dirigido por el idéntico llamado de la historia, es decir, protagonista de la transformación social *como imperativo sociohistórico*” (Olave, 2013, p. 155). En su trasiego posterior, FARC-EP se configurará varias veces antes de llegar a las negociaciones de paz. Para Mario Aguilera (2014), existen cuatro periodos claros en la historia de las FARC-EP:

1. Marginalidad guerrillera con legitimidad social: 1949-1978
2. Decisiones de guerra, Unión Patriótica e inserción en zonas cocaleras: 1978-1991
3. Consolidación militar, diálogos del Caguán y declive político-militar: 1991-2008
4. Guerra de resistencia y búsqueda de la solución negociada: 2008-2013

El primer periodo puede asociarse, por un lado, al momento previo a la fundación de las FARC-EP de autodefensa comunista incubada en el periodo de la Violencia bipartidista (Aguilera, 2014) y, por otro lado, abarca la prolongación de las guerrillas y autodefensas comunistas que crecen y se consolidan como FARC-EP. Hacia el final del periodo hay un cambio militar fundamental, en el que la guerrilla “abandonó la supeditación del aparato armado a la defensa de un territorio —incluso con fuerzas móviles— para convertirse en una guerrilla trashumante y que usa una táctica de guerra de guerrillas” (Aguilera, 2014, p. 29).

En el segundo periodo se desarrolla un momento clave que es la Séptima Conferencia de la Organización Armada, el 4 de mayo de 1982, en la que se establecen dos directrices de acción estratégica. La primera es la suma de la sigla Ejército del Pueblo (EP) y la creación del plan estratégico para la toma del poder central en Bogotá; desde este punto se da un viraje en el que se privilegia lo militar sobre otros tipos de estrategia. Además, el desarrollo de conferencias, la verticalidad en la jerarquía militar y la cadena de mando, la especialización de papeles, la aparición de estructuras anexas clandestinas, la dosificación de la información entre la misma organización y el aumento de la cantidad de integrantes de la guerrilla permiten ver, a la luz de la teoría de las élites, un proceso de burocratización que en el caso de las FARC-EP tiene como eje las armas.

De acuerdo con Acosta (2020), las FARC-EP “mantuvieron su carácter irregular y aumentaron su movilidad militar para la lucha armada, la pérdida del vínculo societal conllevaría a la precarización del compromiso (*engagement*) político vital para su funcionamiento” (p. 546). Esa ruptura entre la base social y el funcionamiento de la guerrilla que sigue a la Séptima Conferencia, que privilegia la guerra popular sostenida sumada a la burocratización armada, es la ruta por la cual las FARC-EP llegan a convertirse en élite armada. A su vez, se establece un fuerte sistema vertical de poder para organizar la estructura político militar y, siguiendo a Acosta (2020), se da la

...consolidación de una jerarquía bastante radical de mando, estableciendo como cabeza de la organización al Estado Mayor Central y al Secretariado del Estado Mayor Central. Igualmente, en la mencionada Conferencia Guerrillera se ratificaron y difundieron tanto las “Normas Internas de Comando”, estipulaciones que regulaban la vida de los guerrilleros y de sus respectivos campamentos, como también el “Reglamento de Régimen disciplinario” para cumplimiento de todos los estratos jerárquicos (p. 546)

Las FARC-EP van a tener una separación definitiva del partido comunista colombiano como consecuencia de discrepancias ideológicas posteriores a la caída del muro de Berlín. De esta separación nace la intención de las FARC-EP para construir sus propias plataformas políticas que permitirían el crecimiento de la guerrilla. Según Acosta (2020), desde la década de 1980, la organización armada tendría dos componentes principales:

...en primer lugar, la guerrilla entendida cabalmente como la agrupación de “revolucionarios profesionales”, “combatientes internos que tienen una conexión menor con la población civil, más nómádicos, algunas veces concentrados en los campamentos y con una orientación mucho más militar”; y, en segundo lugar, las milicias, compuestas por combatientes dentro de la población civil, “asentados en el territorio de presencia del actor armado [que] siguen una vida cotidiana[;] además cumplen tareas militares de inteligencia, encuadramiento militar de la población y hostigamiento ligero a unidades militares enemigas.

Estos componentes estarían basados en los principios de clandestinidad, compartimentación y verticalidad.

Acosta (2020) expone que los principios, el mandato de la disciplina, la verticalidad jerárquica y el centralismo en detrimento de lo democrático va a revelar una tendencia hacia la rigidez militar, que, por un lado, irían en contraposición de los objetivos políticos de iniciales de FARC-EP y, por otro, llevarían a la organización hacia la burocratización.

Como burocracia armada consolidada, es posible ver en la organización una identidad cohesionada, una acción coordinada con estrategias concretas y objetivos conjuntos en los miembros. El desarrollo de las capacidades más elevadas dentro de unos de los órdenes que pueden dirigir, que en este caso es el militar, a través de la modernización bélica y conectándolo a los órdenes económico y político inició un control sobre zonas cocaleras militarmente estratégicas, de rutas de narcotráfico, ampliando los frentes de funcionamiento y conectando al orden político por medio del dominio en territorio de las decisiones locales. Esta inmersión en la vida cotidiana comunitaria implicarán roces con los habitantes y sus instancias de participación.

A su vez, las FARC-EP van a articular tácticas políticas para el apoyo de la Unión Patriótica y “algunas conductas violentas del grupo guerrillero desatarían quejas en los partidos tradicionales, que los acusarían de hacer “proselitismo armado”, es decir, de presionar la votación por las listas de la UP en zonas campesinas” (Aguilera, 2014, p. 159).

Estas acciones políticas durante el proceso de apertura democrática están en correspondencia con el tercer periodo, en el que hay una consolidación como élite armada y, de acuerdo con Aguilar (2014), hay un proceso de construcción de territorios sin Estado, que está más cerca de la instrumentalización de los campesinos cocaleros que de la autonomía, y es donde las FARC-EP establecen como principal forma de control en los órdenes militar, económico y político, estrategias que tienen como eje la violencia. Se organizan movilizaciones cocaleras obligadas para los campesinos de las zonas cocaleras:

...En el Putumayo, la expresión de un campesino parece resumir en buena parte el carácter de la movilización: “salimos voluntariamente obligados”. Pese a la presión de las FARC en la organización y desarrollo de la movilización, los campesinos pudieron plantear sus propias propuestas, e incluso tuvieron la oportunidad de expresar los intereses generales de la comunidad. En otra zona cocalera, la sierra de la Macarena, las FARC hicieron salir a muchos campesinos para vincularse a las marchas, sin que se estuvieran presentando fumigaciones en la región y sin que estos tuvieran un pliego de peticiones para elevarle al Gobierno. A su regreso, los campesinos se encontraron con el fusilamiento de dos hermanos, que habían instado a sus vecinos a no salir a manifestarse (Aguilera, 2014, p. 248).

En este tercer periodo se retoma la figura de Simón Bolívar en detrimento de los símbolos marxistas-leninistas y, de acuerdo con Acosta (2020), la guerrilla crearía “una nueva estrategia ofensiva que implicaba no solo su fortalecimiento militar en las zonas rurales sino también la creación de organismos políticos subsidiarios y clandestinos cuyo centro de acción se daría fundamentalmente en los principales centros urbanos de Colombia” (p. 546).

Cabrera y Echandía (2018, 2019) proponen que las FARC-EP van a ganar dominio en las regiones fronterizas que pueden garantizar abastecimiento, participación en negocios

ilícitos transnacionales, aumentar su financiación, mostrar la vigencia de su poder bélico y evadir lugares sobre los que tenga control el Estado y la élite gubernamental, complementado con “las estrategias empleadas por grupos armados sobre la población, como por ejemplo el terror, la explotación económica, o el apoyo mutuo son definitivos en el comportamiento funcional de la población durante la guerra (p. 43). Con la ruptura gradual de las relaciones directas entre la base social que legitima el primer periodo de las FARC-EP, las estrategias basadas en el uso y administración de la violencia van a ser privilegiadas para ejercer el dominio territorial en sus zonas de influencia. La relación entre las FARC-EP y la población estaba mediada porque el “grupo aseguraba una protección a los cultivadores y cierta regulación del mercado. Esto podía ir a la par con la adhesión al discurso de la guerrilla, pero se trataba también de una relación funcional” (Cabrera & Echandía, 2018, p. 45). Al ser funcional, la lealtad de los habitantes no estaba asegurada, y es posible que resulte incierta en contextos posteriores al acuerdo.

Desde la perspectiva de la teoría de las élites, el uso de la violencia afirma que cada grupo minoritario organizado con capacidad de dominar un orden aplica la fuerza y cada uno la justificada. De acuerdo con Pareto (1980), así como existen órdenes que caen al no saber que pueden servirse del uso de la fuerza, en contraparte ningún grupo en el poder puede durar haciendo únicamente uso de esta.

Las estrategias que la élite usa para mantenerse en el poder deben ser complementarias y conectadas con otros órdenes y esferas más allá de las que inicialmente llega a dominar. En este sentido, Quishpe (2019) propone que las relaciones entre las FARC-EP y las mayorías campesinas no estaban únicamente regidas por la violencia o el terror, sino que llegaban más allá: las FARC-EP también funcionaban como un agente de cultura en los territorios, en los que produjo al menos 500 canciones, varios grupos artísticos que iban desde el vallenato hasta el rap, y es que la función de la música, la cultura y el capital simbólico en el conflicto armado es una conexión todavía poco estudiada de la relación entre población civil y las FARC-EP.

Para Quishpe (2019), la música es un eje de importancia en el trabajo político militar de las organizaciones armadas, que se usa como una forma efectiva de propaganda, elemento legitimador para difundir objetivos y principios que faciliten el reclutamiento, fuente para atraer recursos financieros, llamado a la acción política, o incluso para educar de manera alternativa, “presentando hechos, cuestionando las formas tradicionales en que estos se han entendido y agrupando ideas o eventos de manera creativa. Además, para compartir una particular visión del mundo, buscando cambiar las ‘actitudes cognitivas de la escucha hacia una ideología particular’” (Quishpe, 2019, p. 558).

La música y otros productos culturales pueden complementar el trabajo armado modificando las formas en que las mayorías civiles pueden ver a la élite armada. Para Quishpe (2019), la música tiene funciones tanto dentro de la organización como hacia afuera para

relacionarse con la sociedad civil y los enemigos. Hacia dentro, la música cumplió un papel cohesionador que garantizó la identidad colectiva fariana y como vehículo de conexión entre experiencias compartidas en los combates; también fue un producto cultural disputado con otros actores armados ilegales y funcionó para consolidar los gobiernos insurgentes mediante los cuales regulaban la vida cotidiana de las comunidades.

Hacia afuera, en relación con la población civil y otros actores, la música cumplía 3 funciones:

1. Como estrategia de propaganda, los guerrilleros que hacían parte de las comisiones de organización y de difusión política organizaban asambleas para informar a la población sobre su programa de acción. “Ya fuera para abrir o para clausurar la reunión, siempre se trataba de incluir un canto fariano, ejecutado en vivo por el guerrillero más destacado a nivel musical o por varios combatientes en coro” (Quishpe, 2019, p. 570). De forma paralela, algunos integrantes de las FARC-EP entregaban la música en tabernas o bares del territorio esperando que los dueños reprodujeran la música mientras el negocio estuviera abierto.
2. En el territorio rural de Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare, la insurgencia desarrolló un trabajo sostenido con la población que permitió rebasar el uso de la música como propaganda. Eran las “[...] FARC-EP quienes llevaban la oferta cultural a estas regiones; regiones en donde el Estado aparte de no llegar con la oferta institucional de servicios básicos mucho menos lo hacía con el arte y la cultura” (Quishpe, 2019, p. 571).

Las FARC-EP en algunos casos se convirtieron en el principal productor de accesos culturales como música, medios audiovisuales y producción escrita, que se difundían en algunos de los territorios bajo su influencia. Sus grupos musicales participaban en eventos civiles como cumpleaños, bazares, concursos de belleza, partidos de fútbol y asados (Quishpe, 2019). Esto funcionó como un modo de transmitir sentires ligados a los procesos orales de la población campesina y desde los mandos se insistía en que los grupos culturales de cada territorio estuvieran ligados al folclore de los territorios donde trabajaban.

3. Por otro lado, la música operó como parte de las estrategias de terror que acompañó los actos de violencia: por ejemplo, los militares estadounidenses usaban metal a todo volumen como una estrategia psicológica para minar la voluntad de los extremistas islámicos, mientras que el Revolutionary United Front (RUF) ejecutaba tambores y música Bubu para anunciar su llegada y luego desplazar a la población civil en Sierra Leona (Quishpe, 2019, pp. 558-559).

Los diferentes usos de la música y otros productos culturales audiovisuales ayudaron a mantener a las FARC-EP como élite armada en los territorios donde hacían presencia durante el conflicto armado. Los accesos culturales cumplían varias funciones, algunas de ellas relacionadas con las dinámicas de guerra y las estrategias de terror frente a actores externos.

Al final de este periodo, el uso constante de la violencia y el narcotráfico como forma principal de dominio en los territorios provocó un rápido declive en el apoyo social de las mayorías campesinas y el fracaso de las negociaciones con el gobierno de Pastrana entre 1999-2001, que en cierta medida impulsarían la victoria electoral de Álvaro Uribe Vélez desde el 2002 hasta el 2010, periodo en el que prevaleció la estrategia de salida militar al conflicto armado, llevando a las FARC-EP a fortalecer principalmente su capacidad militar. Sin embargo, derrotas militares por parte de la élite gubernamental, la pérdida de apoyo de la base social y la presión que establecieron estas mayorías para influir en las decisiones de las FARC-EP como élite armada, materializadas en las marchas del 2008 que tuvieron como consigna el lema “FARC-EP no son el ejército del pueblo” (Aguilera, 2014.) causaron también un declive político y militar en la élite armada.

Tránsito de FARC-EP a FARC: retos para la consolidación de una fuerza política

El cuarto periodo, siguiendo a Aguilera (2014), inicia con la muerte de Antonio Marín Tirofijo, máximo dirigente de las FARC-EP, y se caracterizó por un intento de reorganización militar que permitiera renovar las FARC-EP: promoción de movimientos clandestinos, intentos políticos y búsqueda de negociación que, durante el 2012, van a comenzar en el gobierno de Juan Manuel Santos, primero de forma clasificada y después de manera pública.

De acuerdo con Olave (2016), entre 2012 y 2016, se da una reformulación polémica en el discurso guerrillero, que puede ser vista en los medios de comunicación usados por las FARC-EP, en específico la revista Resistencia, en la que se expone cómo se transforma, desde los elementos lingüísticos, en lo que posteriormente sería FARC.

Desde la perspectiva de las élites, la transformación de las FARC-EP en FARC puede representar una forma de convergencia e integración de una élite armada no gubernamental al sistema tradicional de participación política controlado por la élite gubernamental. Así, para los primeros es una oportunidad en la estructura política de avanzar, reformular las estrategias de acceso al poder sin el uso de la violencia y consolidarse como clase política que a futuro pueda ser un recambio en el sistema cíclico de dominio, esta vez con alcance nacional; para los segundos puede ser una táctica reciente de renovación de poder y evitar un recambio en la élite política tradicional oligárquico que, según la ley de Michels (1991), es un intento por evitar el recambio en el ciclo de circulación de élites o clases políticas, antes intentado en la estrategia de guerra, y que con la firma del Acuerdo Final en el 2016 se podría vincular la negociación, el convencimiento e incluso el engaño.

El orden militar en el que las FARC-EP se consolidaron como élite armada y que le permitieron conectarse con los órdenes económico y político en los territorios bajo su

influencia, donde construyó una institucionalidad paralela al Estado, sin el Estado, a través del control de la violencia, la economía del narcotráfico, las rutas comerciales, la propaganda, la música, las apuestas escolares comunistas, la administración de las decisiones, la dosificación de la justicia, la instrumentalización o convencimiento del campesinado para establecer relaciones funcionales en medio del conflicto armado y el enfrentamiento a las fuerzas militares de la república representativa desapareció con la entrega de las armas.

Las FARC-EP confiaban en que su tránsito político que las reincorpora como partido FARC a la nación colombiana se vería respaldado por una base social de mayorías rurales; sin embargo, durante los cuatro periodos de su consolidación como élite armada, la ruptura con la base social ocasionó un declive visible en el apoyo representativo cuantificado en votos. Según Cabrera y Echandía (2018), es fundamental saber “en qué medida el nivel, los repertorios y la ausencia de la coerción inciden en el apoyo de la población al actor armado que se transforma en partido político” (p. 43).

Posterior al proceso de dejación de armas, la reincorporación política se vio afectada por la cohesión político-militar que tenía hasta el momento la organización, la jerarquía de poder, el modo de reclutamiento y relación con la base social. Si se observan otras organizaciones armadas en tránsito a la vida civil, como en los casos de Ruanda, Sudáfrica, Chad y Liberia, Cabrera y Echandía (2018) exponen que hay una:

...existencia de liderazgos claros; la relación y coordinación entre la élite, los mandos medios y la base del grupo excombatiente; así como las aspiraciones, visiones e intereses de los desmovilizados, son decisivos en la transformación y consolidación del grupo rebelde en partido político (pp. 43-44).

En el caso de Colombia, en el partido FARC los liderazgos también permanecen claros en el tránsito de élite armada a partido político en proceso de consolidación como clase política. Así que, si logra recuperar el apoyo de la base compuesta por exintegrantes FARC-EP y mayorías campesinas para lograr converger sus intereses con la representación de los intereses de la mayoría, así como analizar la agenda política y el escenario de participación al que ingresa, podría apuntar a consolidarse como una élite en el escenario de la política civil desarmada.

Para lograr esto, una de las problemáticas a las que se enfrenta el estado de la élite gubernamental es la protección del tránsito FARC-EP en FARC, así como de la base de exintegrantes guerrilleros que hacen parte de la estrategia de reincorporación social y económica. Por otro lado, en casos como los de El Salvador, en los que existían campesinos aparentemente afiliados al FMLN, terminaron retirando su apoyo a la organización en el contexto posterior al conflicto armado (Cabrera & Echandía, 2018). En el caso del RUF de Sierra Leona, el uso de “tácticas militares de alto impacto humanitario y la ausencia de una

agenda política definida incidieron en un bajo apoyo de la población durante y después del conflicto armado” (Cabrera & Echandía, 2019, p. 103).

En el caso de FARC, existe la posibilidad de que su uso de la violencia como parte de la estrategia militar en su previa configuración como élite armada pueda incidir en el apoyo de las mayorías a la hora de votar. Si se suma esto a la falta de mecanismos materiales para la protección de exintegrantes guerrilleros en los antiguos Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación (ETCR) y el reacomodo de otras minorías organizadas armadas en las zonas rurales que ya no tienen influencias de las FARC-EP que dominen la participación política de los habitantes, y otros órdenes o esferas, podría llegar a decantar en el fracaso del intento de tránsito político de FARC-EP a FARC. Siguiendo a Cabrera y Echandía (2018),

...En efecto, un primer reto de seguridad tiene que ver con el reacomodo de grupos ilegales. Mientras que en el Catatumbo, varias Estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) han expandido su zona de influencia a partir de la concentración de las FARC en la zona veredal de Caño Indio, en el municipio de Tibú, en el Bajo Putumayo, el único grupo ilegal activo en la actualidad, conocido como La Constru, estaría liderando actividades criminales en espacios en los que las FARC tenían un control hegemónico (p. 47).

Esta reconfiguración de los actores armados en los contextos rurales que usan estrategias de dominio asociadas a la guerra dentro del orden militar, en combinación con el control de los órdenes económico y político a través del narcotráfico, la instrumentalización de la población y el clientelismo, representa un punto de análisis que, desde la teoría de las élites, puede llegar a representar un recambio de élites armadas en las zonas rurales, que tiene una circulación más rápida que el recambio que se puede dar en el sistema gubernamental al que ahora tiene acceso FARC.

Los retos estatales de la élite gubernamental siguen siendo establecer la institucionalidad dentro de los límites del territorio colombiano; es decir, le corresponde no solamente reincorporar a los actores involucrados en las dinámicas del conflicto armado, sino también reincorporar en sí mismos los territorios que existen únicamente dentro del imaginario estatal; de lo contrario, seguirá enfrentándose a varios grupos minoritarios organizados en torno a las armas durante las siguientes décadas.

De mantenerse las dinámicas rurales de construcción de institucionalidad paralela y las dinámicas urbanas que mantienen una élite gubernamental dentro de la ley de hierro de la oligarquía que no se renueva, que no integra nuevos elementos o que no es reemplazada, las dinámicas de violencia en todas sus expresiones tienen probabilidad de continuar reproduciéndose.

Para Cabrera y Echandía (2018), “la organización de un nuevo movimiento político por parte de las FARC plantea la emergencia de una nueva fuerza electoral que cuenta con distintos escenarios de oportunidad en el ámbito de la participación política” (p. 59). Como partido político podría desplegar su capacidad de influencia y, por eso, Cabrera y Echandía (2019) proponen que

...el paso de las armas a los medios políticos es una oportunidad de alto valor en el caso de las FARC-EP para ejercer su influencia con herramientas democráticas y un avance tangible en cuanto a la reincorporación de esta guerrilla y la construcción de paz (p. 98).

Esta oportunidad dentro del sistema tradicional de representación tendrá éxito solo en el caso de FARC pueda obtener votos en las elecciones legislativas y ejecutivas. En 2018, FARC tuvo la oportunidad, por primera vez, de participar como partido en los procesos electorales de marzo, y sus resultados plantearon un futuro incierto en la consolidación como fuerza política desarmada. Siguiendo a Cabrera y Echandía (2019),

...De acuerdo con la información de los comicios al Congreso de la Registraduría (2018, marzo 11), las FARC no alcanzó el umbral o el número mínimo de votos establecido por ley —correspondiente a 2 % de votos válidos— para que un partido o movimiento político pueda acceder a una curul en el Senado. Con 52 532 votos, la FARC logró tan solo 0,34 % de los votos totales válidos, ubicándose en el puesto 14 de los 16 partidos que participaron en las elecciones. Por lo tanto, en ausencia de la medida transitoria que estableció el Acuerdo final para la representación de las FARC-EP en el Congreso, este grupo no alcanzó el apoyo electoral suficiente para hacer parte de las bancadas del Legislativo (p. 98).

Los votos por FARC se dieron principalmente en lugares donde ya tenían presencia, pero esto no se vio traducido en la fidelidad de los pobladores en el caso de las elecciones. Según Torrijos y Abella (2018), FARC, en las *Tesis de abril: por un partido para construir la paz y la perspectiva democrático-popular*, se plantea metas para su configuración como partido relacionadas con alcanzar el corazón de la población para superar la estigmatización y la distorsión a la que han sido llevados en el imaginario colombiano; se proponen estar en total disposición para alcanzar la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz y la consolidación de una nueva estrategia política.

Si FARC quiere consolidarse como una fuerza con capacidad para influenciar en el orden político, debe trabajar en la creación de la nueva estrategia política que le permita recuperar la base social con la que contó en los periodos iniciales de su existencia, para así ampliar su aceptación en las mayorías y encontrar nuevos apoyos electorales. Para ello, es necesaria una estrategia que vincule los liderazgos del partido a las masas en una relación

directa que identifique la agenda política del escenario de participación colombiano, así como los intereses de los habitantes de Colombia y puedan proyectarse como un partido representativo en una fase inicial del ciclo de formación de élite.

Torrijos y Abella (2018) describen que FARC pretende en sus objetivos como partido forjar una nueva política social que transforme y mejore los órdenes sociales vigentes, que desde la autogestión, la democracia comunitaria de base, la disputa por el poder estatal en las urnas y la construcción de un orden social de abajo hacia arriba le permitan llegar a tener influencia y dominio del orden político; sin embargo, en su periodo como élite armada, en el que las dinámicas de guerra y la violencia fueron su principal fuente de dominación, se rompió la conexión directa con las mayorías campesinas, por lo que la estrategia que se plantean debe tener un fuerte componente de reparación, reconciliación y construcción de paz que se difunda entre la ciudadanía colombiana.

La estrategia podría tener acciones concretas, como campañas que sean un esfuerzo público y constante para hacer reivindicaciones o reclamos frente a las élites gubernamentales; la creación de asociaciones anexas al partido; grupos de interés; declaraciones en medios públicos; producción de material escrito y audiovisual desde el cual muestren su valor como posible representante de las mayorías colombianas y cohesione una identidad política no armada, a la vez que exponga sus compromisos como partido para ellos mismos y con sus posibles electores.

En este sentido, Raymond (2017) propone que los rebeldes en proceso de reincorporación política han ganado durante sus años de experiencia en las dinámicas de guerra en el interior de un conflicto armado habilidades específicas y transferibles: entre las primeras están las capacidades de combate, el conocimiento del terreno, el conocimiento del enemigo, el uso de estrategias bélicas (que en el caso de las FARC-EP son las habilidades de mayor desarrollo al momento de convertirse en élite armada que domina un orden militar); en el segundo caso se encuentran el establecimiento de redes de trabajo, la producción simbólica de su ideología a través de música, asambleas, accesos culturales y el desarrollo de organizaciones políticas (en el caso de las FARC-EP estaría la revista Resistencia, los grupos clandestinos, la música fariana, las asambleas, la formación política para guerrilleros y para población civil).

En consecuencia, Söderström (2014) plantea algunos elementos centrales para que la transición y reincorporación en la dimensión política sea exitosa y aumente la posibilidad de supervivencia del grupo político, en este caso el partido FARC. Estos elementos son la coherencia del grupo, la cohesión interna entre objetivos e individuos que integran el partido, el grado de apoyo popular externo, la visión de la comunidad internacional que reconozca como legítimo el partido o grupo, ser apoyado simbólicamente, tener un espacio para escuchar la voz de sus miembros y no solo de los líderes, encontrar fuentes de financiación diferentes a las usadas en el conflicto armado y comprender que en el proceso de

reincorporación no siempre tiene efectos positivos traslapar los rangos y jerarquías del momento armado a las dinámicas civiles.

Una vez la organización se ha transformado en partido, FARC puede usar las habilidades transferibles descritas por Raymond (2017) para hacer frente a los partidos políticos tradicionales, recuperando su base social disminuida y generando nuevas redes de apoyo. De no contarse en nuevas estrategias políticas, podrían llegar a convertirse en un partido políticamente funcional, pero no necesariamente “democráticamente funcional”, como lo expone Söderström (2014). Por otro lado, si FARC logra cohesionarse como minoría organizada frente a lazos identitarios, objetivos conjuntos y relaciones directas con las mayorías civiles y de exintegrantes de las FARC-EP, tiene la posibilidad de convertirse en un representante político que pueda comprometerse en el reconocimiento de las causas del conflicto y proponer nuevas vías para su solución.

Conclusión

Los cuatro periodos de configuración de las FARC-EP identificados por Aguilera (2014), así como su posterior transformación en FARC el 1 de septiembre de 2017, permiten pensar las relaciones entre el trasegar de la guerrilla como élite armada y su proceso actual de configuración como partido y clase política. El dominio sobre el orden militar y su conexión con los órdenes políticos y económicos a través del uso y dosificación de la violencia permiten hacer visible que las armas fueron el principal sistema de poder en las FARC-EP, por encima del convencimiento, la negociación o la representatividad de las mayorías campesinas. Entonces, durante el proceso de dejación de armas, las FARC-EP dejan su eje central de poder dentro del cual ejerce dominio sobre los órdenes militar, político y económico y desaparece como élite armada, pero nace como partido político. FARC participa en los procesos electorales de 2018 y, aunque su apoyo es bajo, puede llegar a representar una fuerza política en las décadas siguientes si tiene en cuenta que debe ajustarse al escenario de participación del posacuerdo y reconoce que debe entrar a crear estrategias para mejorar sus capacidades en otros órdenes y esferas del sistema de poder.

FARC, como partido sin una base social mayoritaria consolidada para influir en el orden político como consecuencia de la desaparición de la coerción armada, tiene la oportunidad de comenzar a ajustar sus repertorios de acción para que la estructura de oportunidad política en la que se encuentra llegue a ser un catalizador de su consolidación como futura élite política con peso suficiente para entrar a competir en el sistema tradicional de representación y, ¿por qué no?, ser un recambio en el ciclo de circulación de élites.

Analizar el caso de transformación de las FARC-EP en FARC permite reflexionar en torno a la ley de hierro de las oligarquías postulada por Michels (1991), solo que el proceso no se

da dentro de las grandes instituciones, como lo plantea Wright (1987), sino como una forma de élite dominante específica en un orden que establece sistemas de regulación paralelos a los del Estado, porque los territorios sobre los que tiene influencia no existen en el Estado.

Inicia no reemplazando una élite gubernamental, sino rellenando el vacío de la incapacidad estatal de la élite gubernamental para institucionalizar el territorio nacional. Al tomar el espacio del Estado en los territorios bajo su control, emula las instituciones de las élites gubernamentales, con la diferencia clave que se decanta por el uso excesivo de la violencia para mantener el dominio territorial, lo que con el tiempo en la búsqueda de garantizar su propia supervivencia y legitimación hace que crezca, se burocratice, debilite sus relaciones con la mayoría campesina que lo legitima, se especializa en las capacidades militares y se transforma en una élite armada.

La élite armada es, entonces, un grupo minoritario organizado que tiene la capacidad de dominar un territorio como consecuencia de haber llegado a desarrollar una capacidad efectiva de control en uno o más órdenes —en el caso de las FARC-EP es el orden armado— y consolida su acción al conectar el orden militar de su dominio con el político, orden de donde obtiene su origen (pero no su fuerza) en el movimiento agrario, el partido comunista, el mito fundacional del ataque estatal a Marquetalia, en el pensamiento comunista, marxista-leninista y la reivindicación posterior de la figura de Simón Bolívar. Se conecta posteriormente al control del orden económico con el control territorial, el acceso a las zonas cocaleras, el narcotráfico y las rutas de comercio de ilícitos.

La élite armada mantiene su base mayoritaria por diversas estrategias, como la oferta a accesos culturales producto de la propia élite, el convencimiento, la negociación, el engaño y el uso de la violencia. La mayoría campesina desorganizada mantiene una relación funcional con la élite armada, así como de convencimiento y adhesión a los ideales, estrategias y objetivos propuestos por las FARC-EP. Con el tiempo, el uso de la violencia contra la población civil, la instrumentalización del campesinado cocalero, el surgimiento de la organización campesina comunitaria contraria a la visión armada, el crecimiento, la burocratización, la especialización y el privilegio de estrategias bélicas por parte de las FARC-EP crean una ruptura entre la organización embrionaria armada en proceso de consolidación y la base mayoritaria de soporte y legitimación, estableciendo una élite armada separada del potencial de representación popular.

El contexto de salida militar y de guerra sin tregua durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el descontento en aumento de la población que no se siente representada por las FARC-EP retirando gradualmente el apoyo y la estructura de oportunidad política de la búsqueda mutua de negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, que configura una apertura política que permite los diálogos de paz resultando en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, permite la transición de la élite armada de las FARC-EP al partido político FARC.

La influencia en el ordenamiento de los territorios puede encontrarse en actores tanto estatales como no estatales; en el caso de las minorías organizadas no estatales y no gubernamentales también existe la posibilidad de que sean contrahegemónicas o no (Beuf, 2019). En este capítulo se ha reflexionado solamente frente a uno de los actores que componen la diversidad de dinámicas en el territorio colombiano y que varían en sus orígenes, estrategias, principios, ideales, objetivos y configuraciones. Cairo y Ríos (2019) proponen que los actores en pugna dentro de un territorio tienen perspectivas diferentes de asuntos como la guerra, la paz o la institucionalidad, y cada uno construye significados como grupo para movilizar las agendas propias.

Incluso reconociendo esto, como lo propone Sandoval (2014), los conceptos y sistemas teóricos para el análisis social y político llegan a encontrar limitantes a la hora de abordar el caso del conflicto armado colombiano y es posible que la reflexión en torno a la transformación de las FARC-EP como élite armada en FARC, a la luz de la teoría de las élites, permita reconocer puntos clave de la incidencia de los grupos armados en el funcionamiento de los territorios que no tienen sistemas estatales institucionalizados. Puede servir también para describir las etapas en las que funcionaría parcialmente la ley de hierro de la oligarquía propuesta por Michels (1991), donde el partido FARC, con una estrategia clara y desarrollo de capacidades políticas, podría llegar a ser recambio en un proceso cíclico de circulación de élites, o, por el contrario, sería integrado al sistema tradicional de participación sin que sea funcionalmente democrática o representativa para las mayorías, sirviendo así a la reproducción y renovación de las élites gubernamentales dominantes en el orden político.

Por otro lado, esta reflexión privilegia el análisis de las FARC-EP como élite armada, donde el eje central de dominación es el orden militar y las dinámicas de violencia del conflicto armado; sin embargo, existe la posibilidad de reconocer la influencia cultural de la organización armada en los territorios, así como explorar el grado de convencimiento frente a los principios y objetivos que tuvieron o tienen las bases guerrilleras o algunas poblaciones civiles frente a las estrategias de las FARC-EP, que pueden estar materializadas en la memoria, la música u otros productos culturales, como lo plantea Quishpe (2018, 2019), y que se encuentran realizados, en el marco del posacuerdo, en los trabajos artísticos colectivos e individuales de FARC, como el de Rubín Morro (2017), aunque el bajo apoyo electoral del 2018 (Cabrera & Echandía, 2018, 2019) podría contrastar con los planteamientos de un apoyo por convencimiento, adherencia o lazo identitario, incluso si se reconocen los logros de FARC en las elecciones legislativas.

FARC está en proceso de reincorporación política y su base de exintegrantes guerrilleros hace parte del proceso de reincorporación social y económica, en su mayoría también militantes del partido. Sin la fuente principal de poder materializada en las armas, FARC debe comenzar a ajustar y crear estrategias, repertorios de acción y actividades concretas que le permitan recuperar y aumentar la base social que les sirva de apoyo, así como

articular las dimensiones que, según Söderström (2014), son centrales en el éxito del tránsito entre grupo armado y fuerza política representativa. Estas estrategias deben tener en cuenta un relacionamiento directo con las mayorías de votantes e implicar la difusión de los avances en materia de reconciliación, reparación, construcción de paz, así como establecer objetivos que concuerden con las necesidades de representación de los ciudadanos colombianos.

Referencias bibliográficas

- Acosta, C. (2020). Férrea, pero consciente: disciplina y lazo identitario en las organizaciones clandestinas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP. *Izquierdas*, (49), 541-553. <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-50492020000100230>
- Aguilera, M. (2014). *Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013*. Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Cairo, H., & Ríos, J. (2019). Las élites políticas y la paz territorial en Colombia: un análisis de discurso en torno al Acuerdo de Paz. *Revista Española de Ciencia Política*, (50), 91-113.
- Cabrera, I., & Echandía, C. (2018). Las FARC en la política: riesgos de seguridad y escenarios electorales en el Catatumbo y el Bajo Putumayo. *Revista Colombiana de Sociología*, 41(suplemento), 39-63. <https://doi.org/10.15446/rcs.v41n1Supl.68317>
- Cabrera, I., & Echandía, C. (2019). Retos institucionales y no institucionales para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en las elecciones legislativas de 2018. *Estudios Políticos*, (56), 92-121. <https://doi.org/10.15446/rcs.v41n1Supl.68317>
- Campbell, J. (1991). *El poder del mito*. Emecé.
- Cubides, F. (2005). *Burocracias Armadas. El problema de la organización en el entramado de las violencias colombianas*. Norma.
- García, M., & Revelo, J. (2018). La construcción del Estado local en Colombia. *Análisis Político*, 31(92), 69-95. <https://doi.org/10.15446/anpol.v31n92.71098>
- Garzón, I., & Agudelo, A. (2019). La batalla por la narrativa: intelectuales y conflicto armado en Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, (69), 53-66. <https://doi.org/10.7440/res69.2019.05>
- Marín, K., & Espinosa, N. (2017). Normalización sin transición: la dimensión territorial del proceso de paz en la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN) de LaMacarena. *El Ágora USB*, 17(2), 324-613. <https://doi.org/10.21500/16578031.3281>
- Michels, R. (1991). *Los partidos políticos* (Vol. 1-2). Amorrortu.
- Morro, R. (2017). *Diario de la guerra y la paz. Relatos y poemas de trinchera*. Teoría & Praxis.

- Mosca, G. (2009). *Historia de las doctrinas políticas*. Reus.
- Mosca, G. (1984). *La clase política*. Fondo de Cultura Económica.
- Olave, G. (2013). El eterno retorno de Marquetalia: sobre el mito fundacional de las FARC-EP. *Folios*, (37), 149-166. <https://doi.org/10.17227/01234870.37folios149.166>
- Olave, G. (2016). De la oposición política en el discurso: la reformulación polémica en la retórica guerrillera colombiana. *Palabra Clave*, 19(2), 398-421.
- Pareto, V. (1980). *Forma y equilibrios sociales*. Alianza Editorial.
- Pareto, V. (1981). *Historia de las ideas políticas*. Tecnos.
- Quishpe, R. (2018). Los excombatientes y la memoria: tensiones y retos de la memoria colectiva construida por las FARC en el posconflicto colombiano. *Análisis Político*, 31(93), 93-114. <https://doi.org/10.15446/anpol.v31n93.75619>
- Quishpe, R. (2019). Corcheas insurgentes: usos y funciones de la música de las FARC-EP durante el conflicto armado en Colombia. *Izquierdas*, (49), 554-579.
- Raymond, J. (2017). From combatants to candidates: Electoral competition and the legacy of armed conflict. *Conflict Management and Peace Science*, 34(3), 240-263. <https://doi.org/10.1177%2F0738894215593676>
- Rojas, D. (2013). *Much more than a war on drugs: elementos para un balance del plan Colombia*. *Análisis Político*, 26(77), 113-132.
- Sandoval, M. (2014). Investigación sociológica y conflicto armado en Colombia. *Revista colombiana de sociología*, 37(1), 99-120.
- Söderström, J. (2014). *Getting from insurgency to politics*. <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/13863/getting-from-insurgency-to-politics>.
- Torrijos, V., & Abella, J. D. (2018). The FARC's behavior after signing of the Peace Agreement. *Revista científica general José María Córdova*, 16(24), 31-60. <https://doi.org/10.21830/19006586.342>
- Tuirán, A., & Trejos, L. (2017). Debilidades institucionales en el nivel local. Desafíos de la gestión territorial de la paz. *Análisis Político*, 30(90), 77-102. <https://doi.org/10.15446/anpol.v30n90.68557>
- Wright, C. (1987). *La élite del poder*. Fondo de Cultura Económica.